135-2011

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del día doce de octubre de dos mil once.

Por recibida la demanda de amparo y el escrito suscrito por la abogada Lidia Noemy Suncín Sánchez, en carácter de apoderada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (en adelante, ISSS), contra actuación atribuida al Tribunal Arbitral *ad hoc* de derecho que conoció del diferendo surgido entre el citado instituto y la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, con ocasión del contrato de construcción de obra llave en mano identificado con el No O-004/2005.

A sus antecedentes el escrito firmado por el abogado José Roberto Barriere Ayala, actuando en calidad de apoderado de la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital variable, por medio del cual solicita que se le permita gestionar en este proceso en el carácter en que comparece y que se tenga a su mandante como tercero beneficiado en el presente proceso.

Antes de emitir el pronunciamiento que corresponda, se estima conveniente realizar las siguientes consideraciones:

I. La abogada Suncín Sánchez, en la calidad antes apuntada, cuestiona la constitucionalidad del laudo arbitral emitido a las catorce horas del día 2-II-2011 por el Tribunal Arbitral *ad hoc* de derecho que conoció del diferendo surgido entre el ISSS y la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, en relación con el contrato de construcción de obra llave en mano identificado con el No O-004/2005.

Expresa que, aparentemente, dicha actuación ocasionó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, defensa, igualdad y presunción de inocencia de su mandante.

I. Con relación a la presunta infracción del derecho a la igualdad, afirma que la prueba pericial que fue producida en el proceso arbitral –y que, además, fue la única en que se fundamentó el laudo que impugna– fue valorada por el tribunal a quien demanda sólo en aquellos aspectos que favorecieron a la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable. En su opinión, ello trajo como consecuencia la vulneración del principio de comunidad de la prueba.

Además, expresa que su poderdante ofreció la prueba por inspección en el proceso de arbitraje, la cual fue rechazada por el aludido tribunal arbitral con base en el argumento de que no eran personas técnicas con conocimientos comprobados los que determinarían verazmente la proporción de las obras que supuestamente habían sido ejecutadas.

Sobre este aspecto, señala que “... el ISSS nunca [le pidió a la autoridad a quien demanda] que [determinara] las porciones de la obra que estaban pendientes de ejecutar, sino solamente que estas existían, especialmente lo relacionado con la falta de instalación de los equipos [...] que se encontraban embodegados y dentro de sus cajas...”.

En definitiva, en relación con este punto del reclamo, la profesional en mención acota que “... respecto de la admisión de la prueba[,] ha existido una desigualdad en el trato [de] las partes, puesto [que] existía identidad...” tanto en la inspección como en los equipos de la obra. No obstante ello, explica que la autoridad demandada sólo admitió dicho medio probatorio en beneficio de la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable.

2. Con respecto a la presunta transgresión del derecho a la presunción de inocencia, expone que, para el tribunal arbitral en contra de quien formula su reclamo, el peritaje es el único medio probatorio que existía para acreditar la existencia de la obra física ejecutada y no pagada. Sin embargo, estima que, de acuerdo con tal tipo de prueba, “... no se sabe con certeza si existe dicha obra física no pagada...”.

A raíz de lo acotado en último término, considera que el laudo por medio del cual el tribunal arbitral relacionado condenó al ISSS a pagar determinada cantidad de dinero se pronunció “... con base en una prueba que no brinda certeza de la existencia del objeto en que fundamenta la obligación de pago...”.

3. En relación con la aparente vulneración del derecho a la seguridad jurídica de su mandante, manifiesta que la autoridad demandada emitió un laudo arbitral “... con graves defectos de incongruencia...”.

Al respecto, afirma que tanto en la demanda de arbitraje como en la contestación a esta quedaron como hechos admitidos aquellos que se referían a que la obra cuya ejecución se estaba llevando a cabo tenía un avance físico de un 95.3%...”. De ahí que –sostiene– si las partes estaban de acuerdo con ello, el tribunal arbitral no debió haber tenido como “verdadero” el 96.33% de avance de la obra.

4. Finalmente, sobre la hipotética infracción del derecho de defensa de su poderdante, la abogada Suncín Sánchez no expuso argumento alguno.

II. Corresponde ahora exponer los fundamentos jurídicos de la decisión que será adoptada.

1. Así, tal como se sostuvo en el auto de 21-X-2010, pronunciado en el Amp. 408-2010, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, han poner de manifiesto la presunta vulneración a la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente legales o administrativos –consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias–, la cuestión sometida a conocimiento se erige en un asunto de mera legalidad, situación que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

En otros términos, en la queja formulada ante la jurisdicción constitucional debe exponerse y fundamentarse una posible vulneración a los derechos reconocidos en la normativa constitucional que se derive de la actuación cuyo control se solicita, puesto que la proposición de una petición exclusiva del marco de legalidad, limitada al conocimiento y decisión de las autoridades ordinarias o administrativas, representa un defecto en la causa de pedir de la pretensión de amparo que, a su vez, implica la imposibilidad de juzgar el reclamo planteado.

2. A. Por otra parte, según lo afirmado en el auto de 12-XI-2010, pronunciado en el proceso de Amp. 104-2009, entre los presupuestos procesales especiales establecidos para la procedencia de la pretensión de amparo se encuentra *el agotamiento de los recursos* que la ley franquea para impugnar el acto contra el cual se reclama.

Lo anterior se justifica en que el amparo posee características propias que lo configuran como un proceso especial, que ha sido establecido para proteger de forma óptima a las personas frente a las acciones u omisiones de cualquier autoridad o particular que vulneren, restrinjan u obstaculicen los derechos o garantías reconocidos en la Constitución de la República. Por ello, se trata de una exigencia particular que el legislador ha incorporado dentro de los presupuestos procesales del citado trámite.

A esta condición específica se refiere el art. 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, al prescribir que el amparo únicamente puede incoarse cuando el acto contra el que se reclama no puede subsanarse dentro del respectivo procedimiento mediante otros recursos. Tal presupuesto obedece a la función extraordinaria que está llamado a cumplir un Tribunal Constitucional: *la eficaz protección de los derechos fundamentales por su papel de guardián último de la constitucionalidad.*

De ahí que el proceso en referencia se erija como un mecanismo de protección reforzada que deberá iniciarse únicamente cuando se han agotado los recursos idóneos –judiciales o administrativos–, por medio de los cuales pueda brindarse una protección jurisdiccional o no jurisdiccional conforme a la Constitución. Dicho trámite está reservado sólo para aquellas situaciones extremas en las que, por inexistencia de otras vías legales o ineficacia de las que existan, peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales.

B. Ahora bien, con arreglo a lo sostenido en la sentencia de 9-XII-2009, pronunciada en el proceso de Amp. 18-2004, la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad, es decir, la de permitir que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los “respectivos procedimientos”.

Con base en lo anterior, se infiere que, al margen de si los recursos son ordinarios o extraordinarios, lo que debe analizarse de ellos es si los medios de impugnación en sentido estricto poseen la idoneidad o aptitud mínima e indispensable para reparar el derecho o garantía fundamental que se considera conculcada.

En ese sentido, para configurar plenamente la pretensión de amparo y se pueda dirimir la cuestión en ella planteada, es imprescindible que se hayan agotado los recursos idóneos franqueados por el ordenamiento jurídico atendiendo a la finalidad que ellos persiguen.

III. Expresado lo que antecede, corresponde en este apartado evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas por la parte actora.

Así, en la calidad indicada al inicio de este proveído, la abogada Lidia Noemy Suncín Sánchez cuestiona la constitucionalidad de la actuación que le atribuye a la autoridad demandada, debido a que esta presuntamente ha vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, defensa, igualdad y la presunción de inocencia.

I. En relación con la aparente vulneración de los derechos de igualdad y presunción de inocencia, se observa que los argumentos con base en los cuales la citada profesional pretende justificar la queja planteada *están orientados a que se analice la valoración de la prueba que el tribunal arbitral demandado hizo en el momento de emitir el respectivo laudo arbitral*. Razón por la cual es necesario determinar si esta Sala detenta competencia material para revisar dicha actividad.

A. a. Sobre el tópico, conviene acotar que la gestión probatoria a cargo de las partes que intervienen en un proceso de arbitraje debe llevarse a cabo mediante un procedimiento institucionalizado por el legislador o por el convenio arbitral, atendiendo a la estructura establecida para cada trámite en particular. Precisamente, tales momentos se traducen en la proposición, admisión, práctica y valoración de la prueba, de entre los cuales interesa destacar esta última actividad, debido a que es la que realizan los árbitros luego de que los medios probatorios han sido producidos.

Así, en términos generales, la valoración de la prueba alude al juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios probatorios que fueron practicados en el momento procesal oportuno. En concreto, dicha apreciación consiste en la verificación de los enunciados fácticos introducidos al proceso mediante la prueba propuesta por las partes, así como el reconocimiento a estos de un determinado valor o peso en la formación de la “convicción” del tribunal.

De acuerdo con lo anterior, existe la obligación de los árbitros de tomar en consideración cada una de las pruebas que hayan sido aportadas, admitidas y practicadas en el proceso, de modo tal que la sentencia que en su momento se emita refleje un análisis crítico individual –para precisar la fiabilidad de cada uno de los medios de prueba– o conjunto –con el fin de establecer la fiabilidad de la hipótesis propuesta por las posiciones procesales–, examen que estará condicionado a que tales canales probatorios reúnan las condiciones fijadas normativamente para su admisión y producción, tales como la licitud, pertinencia o utilidad.

Naturalmente, el citado juicio de aceptabilidad de los resultados probatorios se encuentra regido por una serie de reglas o criterios que le permiten a los árbitros inclinarse por un resultado probatorio, en detrimento de otro.

b. Ahora bien, cuando esas directivas se establecen con la finalidad de indicarle al operador jurídico no qué valor ha de otorgar a un resultado obtenido con la producción de una

determinada prueba, sino qué criterios objetivos y lógicos debe aplicar por sí mismo para fijar los términos del valor o peso de la prueba que ha sido practicada en el trámite correspondiente, estamos en presencia de lo que tradicionalmente se ha llamado “sana crítica”. Si, por el contrario, tales criterios se encuentran expresados en la ley estaremos en presencia de la denominada “tarifa legal” o “prueba tasada”.

Realmente, dichos esquemas de valoración de la prueba aluden a un espectro de elementos de la lógica o de la razón humana –tipificados o no en la ley– que forman parte del acervo cultural de las personas, con arreglo a los cuales se puede verificar si –con alto grado de probabilidad– las afirmaciones sobre ciertos hechos controvertidos que son el objeto de la prueba se corresponden con la realidad.

En ese sentido, las mencionadas reglas confieren una atribución en virtud de la cual son los propios árbitros los que han de aplicar las máximas que ellos han adquirido por su experiencia en la vida o que han sido establecidas en la ley, en el momento de otorgarles un valor o peso a los resultados probatorios.

B. Por ello, la actividad mediante la cual los tribunales arbitrales valoran la prueba es un ámbito material que no puede ser revisado por esta Sala, ya que ello implicaría examinar si eran adecuadas las máximas de experiencia –personales o legales– que en el caso particular tomaron en consideración los árbitros para decantarse por la aceptabilidad o no de cierta información probatoria, situación que –se enfatiza– supondría la invasión de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y debe realizar los árbitros.

De modo que, a partir de las razones antes indicadas, se concluye que el presente alegato expresado por la apoderada del ISSS carece de trascendencia constitucional, debido a que, en rigor, pone de manifiesto la mera inconformidad de la posición procesal demandante con la labor valorativa de las condiciones probatorias que rodearon la emisión del laudo arbitral cuya constitucionalidad cuestiona en este amparo.

En consecuencia, deberá declararse la improcedencia de la pretensión contenida en la demanda incoada, en cuanto a este punto de la queja formulada.

2. Con respecto a la presunta transgresión del derecho a la seguridad jurídica, la abogada del ISSS señala que el laudo arbitral que impugna es incongruente.

Ahora bien, atendiendo a tal tipo de argumento, es necesario determinar, en primer lugar, si en la ley de la materia existe algún mecanismo idóneo con el cual pudo haberse intentado la

reparación de la supuesta infracción constitucional en que, a juicio de la mencionada profesional, incurrió la autoridad demandada en el momento de emitir la actuación reclamada; y, en segundo lugar, de existir dicho mecanismo, si la parte actora agotó la vía previa.

A. a. En tal orden de ideas, es preciso acotar que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 68 número 8 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, los laudos emitidos por los tribunales de arbitraje son cuestionables por medio de la nulidad, cuando tal clase de decisiones son impugnadas por haberse infringido la congruencia, dentro del plazo de siete días hábiles siguientes a la notificación del ellas o de la providencia por medio de la cual se aclaran, corrigen o adicionan. De esta forma, al afectado por la citada providencia arbitral le quedaba expedita la posibilidad de plantear el recurso de nulidad, con el fin de que la Cámara de Segunda Instancia correspondiente corrigiera la incongruencia que a su juicio contenga la decisión recurrida.

En relación con ello, en términos generales, la jurisprudencia constitucional había interpretado hasta la fecha que el presupuesto procesal especial regulado en el art. 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales únicamente se refería a la exigencia de agotar los recursos ordinarios, previo a acceder al amparo.

b. No obstante, en la sentencia de 9-XII-2009, emitida en el proceso de Amp. 18-2004, este Tribunal incorporó un contenido específico al referido presupuesto procesal con base en el cual se entiende que *la exigencia del agotamiento de un recurso no dependerá estrictamente de su naturaleza ordinaria o extraordinaria, sino, por el contrario, de su idoneidad, suficiencia, aptitud o eficacia para proteger el derecho fundamental que se estima vulnerado.*

Con base en tal línea argumental, es posible afirmar que el recurso de nulidad establecido en contra de los laudos arbitrales es un medio de impugnación idóneo, suficiente, apto o eficaz para subsanar las eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales que presuntamente hayan tenido lugar como efecto de la presunta incongruencia en que hayan incurrido los árbitros.

Así, la idoneidad y la aptitud de tal medio de impugnación para el restablecimiento de la supuesta vulneración son manifiestas, debido a que mediante el recurso de nulidad el afectado por la decisión proveída por un tribunal arbitral tiene la oportunidad para que sea un tribunal distinto –una Cámara de Segunda Instancia– el que ordene a la entidad recurrida hacer las correcciones o adiciones que correspondan –art. 70 inciso 2° Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje–.

Y es que, el ámbito cognoscitivo natural que el recurso de nulidad le confiere a la autoridad revisora envuelve la potestad de examinar no sólo la interpretación de las disposiciones legales respectivas y la aplicación de las normas adscritas a estas, sino también los hechos fijados y la valoración de la prueba que haya realizado el tribunal arbitral que emite el laudo que se recurre.

B. En ese orden, si bien la parte actora afirma que ha agotado la vía previa, en virtud de haber planteado el recurso de apelación –el cual fue declarado inadmisibile por la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro–, tal como se estableció en los acápites precedentes, el artículo 68 número 8 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, tipifica como causal del recurso de nulidad el hecho de que el laudo hubiese recaído “... sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido...”.

En ese sentido, es preciso aclarar que el presupuesto procesal de agotamiento de recursos no implica el haber hecho uso cualquiera de los medios de impugnación establecidos por la ley pertinente; sino más bien, haber planteado –en tiempo y forma– los recursos idóneos para el restablecimiento de los derechos constitucionales cuya vulneración se alega en el proceso de amparo.

Por tanto, habiéndose determinado, por una parte, que el recurso idóneo que la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje reconoce en este tipo de casos es el de nulidad y, por otra parte, que la misma abogada de la parte actora ha expresado que el único recurso que el ISSS planteó en contra del laudo contra el cual reclama fue el de apelación, se advierte que el ISSS no interpuso el recurso idóneo para que se examinara la resolución emitida el día 2-II-2011 por el Tribunal Arbitral *ad hoc* de Derecho a quien se demanda en el presente amparo.

Por ello, es imperativo declarar la improcedencia de la demanda incoada, en cuanto a este punto del reclamo, debido a que existe una vía legal adecuada y eficaz que la entidad peticionaria de este proceso no agotó, mediante la cual pudo haberse reparado la lesión producida al derecho fundamental a la seguridad jurídica que alega como conculcado.

3. Finalmente, en relación con la hipotética vulneración del derecho de defensa, la abogada del ISSS no expresó ningún tipo de argumento.

Sobre este punto, se advierte claramente que la mencionada profesional intenta que se revise el laudo arbitral cuya constitucionalidad cuestiona, sin que para ello haya explicitado

alegato alguno orientado a poner de manifiesto una auténtica infracción al apuntado derecho fundamental.

Lo anterior se debe a que dicha abogada se limita a señalar que “... [l]as categorías constitucionales que se estiman vulneradas con [la actuación impugnada] son [el derecho de defensa]...”.

Así las cosas, no es posible identificar adecuadamente la queja que supuestamente ha sido planteada por parte de la apoderada del ISSS, puesto que ha omitido indicar un componente cuya concurrencia es imprescindible para que la pretensión de amparo pueda ser conocida de fondo: *la explicitación clara de los conceptos en que el derecho de defensa ha sido conculcado, en virtud del laudo arbitral contra el cual se reclama.*

En ese sentido, al ser manifiesta la falta de fundamentación constitucional de la solicitud en referencia, se produce un defecto en la configuración de la pretensión constitucional que ha sido formulada, situación que imposibilita su juzgamiento. Por tal motivo, la demanda planteada debe ser rechazada mediante la figura de la improcedencia, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de defensa.

IV. Finalmente, con relación a la petición realizada por el abogado José Roberto Barriere Ayala, actuando en calidad de apoderado de la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, es preciso destacar que –tal como se señaló en la demanda de amparo incoada– mediante este proceso se pretende cuestionar la constitucionalidad del laudo arbitral emitido el 2-II-2011 por el Tribunal Arbitral *ad hoc* de derecho que conoció del diferendo surgido entre el ISSS y la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Asimismo, cabe destacar que por medio de dicha decisión el Tribunal Arbitral condenó al ISSS a pagar una determinada cantidad de dinero a dicha sociedad –en concepto de obra ejecutada y no pagada– relacionada con el contrato de construcción de obra llave en mano identificado con el No O-004/2005.

Por consiguiente, deberá reconocérsele a la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, la calidad de tercero beneficiado y, además, autorizar la participación del abogado José Roberto Barriere Ayala como su apoderado.

Por tanto, con base en las razones expuestas en los acápites precedentes y lo establecido en el art. 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiéndose* a la abogada Lidia Noemy Suncín Sánchez como apoderada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por haber acreditado en debida forma la personería con la que actúa en el presente proceso.

2. *Tiéndose* a la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, como tercero beneficiado con el acto reclamado.

3. *Tiéndose* al abogado José Roberto Barriere Ayala como apoderado de la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, por haber acreditado debidamente la personería con la que actúa en este proceso.

4. *Declárese improcedente* la demanda formulada por la abogada Suncín Sánchez, en la calidad antes apuntada, en contra del Tribunal Arbitral *ad hoc* de derecho que conoció del diferendo surgido entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la sociedad Castaneda Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, con ocasión del contrato de construcción de obra llave en mano identificado con el No O-004/2005. Dicho escrito fue incoado por la presunta vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, defensa, igualdad y a la presunción de inocencia –establecidos en los arts. 2, 3 y 12 Cn.– del mencionado instituto y, además, es rechazado, en vista de que, por una parte, el reclamo formulado se traduce en la mera inconformidad con los efectos que produjo la actuación impugnada y, por otra, no fue agotado el recurso de nulidad previsto en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje para impugnar el laudo arbitral emitido el día 2-II-2011, todo ello con basamento en los razonamientos expuestos en el considerando III de esta decisión.

5. *Tome nota* la Secretaría de este Tribunal del lugar y medio técnico señalado por la abogada Suncín Sánchez, en el carácter antes relacionado, para recibir los actos procesales de comunicación.

6. *Tome nota* la Secretaría de este Tribunal del lugar señalado por el abogado José Roberto Barriere Ayala, en el carácter antes indicado, para recibir los actos procesales de comunicación.

7. *Notifíquese.*

---J. B. JAIME---J. N. CASTANEDA S.---E. S. BLANCO R.---R. E. GONZÁLEZ B.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS.